

UNalienable

ACCESO A LOCALIZACIONES SENSIBLES

MARZO DE 2021

Información de transfondo/ resumen

Publicado en el 2011 y confirmado en el 2017, la **política de localizaciones sensibles** que rige al Immigrations and Customs Enforcement (ICE) o el Servicio de inmigración y aduanas prohíbe que la agencia disponga de sus acciones coercidas en “localizaciones sensibles”. Estas incluyen escuelas, lugares de culto, demostraciones y hospitales, a menos que hayan “circunstancias extraordinarias”. La protección de las localizaciones sensibles de acciones coercidas de parte del servicio de inmigración no es solamente importante para la supervivencia de las comunidades de inmigrantes, pero también para la identidad de este país como un refugio para aquellos que buscan una mejor vida.

Aún con estas políticas y principios, hay un historial documentado de acciones coercidas de parte del Servicio de inmigración que **violan** la promesa de respetar estas localizaciones. Por ejemplo, seis hombres fueron detenidos en Virginia mientras se iban de un albergue religioso para los desamparados. Otros ejemplos incluyen a una mujer texana que fue

arrestada en el hospital aun cuando sufría de un tumor cerebral y a un padre de Los Ángeles que fue arrestado mientras dejaba a su hija en la escuela. Este patrón empeora aún más cuando se involucra la policía local. Por ejemplo, al entrar en los acuerdos 287(g), oficiales de la policía en **Carolina del Norte** fueron grabados investigando clínicas de salud en busca de pacientes indocumentados.

Este documento sobre las políticas de inmigración resalta los obstáculos que previenen que inmigrantes de Mississippi puedan acceder a localizaciones sensibles. Mientras este documento se especializa en las facilidades médicas, hay muchos más lugares “seguros” que se mantienen inaccesibles para la comunidad. Al abordar en algunos casos en particulares, este escrito ofrece algunas recomendaciones acerca de lo que puede ser implementado para asegurar que las realidades vividas se asemejen a las políticas y acciones coercidas de parte del Servicio de inmigración.

Obstáculos para cuidado medico

El 1 de febrero del 2021, el Departamento de Seguridad Nacional o Department of Homeland Security (DHS) lanzo públicamente una **declaración** donde afirmó que no habría acciones coercidas de parte del Servicio de inmigración en los centros de vacunación. Esto se debe a que sigue con la política de evitar localizaciones sensibles. En sus palabras: “Es una obligación moral y para la salud publica que se garantice la vacunación de todos los individuos que residen en los Estados Unidos”. Este no es un compromiso ligero, ya que la comunidad indocumentada de Mississippi (de los cuales muchos son hispanos) se ha enfrentado este último año con riesgos y sufrimientos desproporcionados a la población general.

Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la comunidad hispana tiene una

tasa de casos, hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 **mayor** a cualquier otro grupo étnico en los Estados Unidos, excepto la comunidad indígena-americana. Esta realidad corresponde a un sinnúmero de factores que afectan desproporcionalmente a inmigrantes y a la comunidad hispana. Casi 1 de cinco **trabajadores esenciales** en los Estados Unidos son inmigrantes. Además, casi el 70% de todos los inmigrantes indocumentados tienen trabajos de primera línea en industrias esenciales. De estos, **sobre 400,000** son proveedores de salud. Muchos son empleados por fabricas donde el distanciamiento social es muy difícil o imposible.

Esta comunidad sufre de una falta de seguros de salud generalizada, por lo que se debe mayormente al estatus migratorio de sus miembros. El Instituto de Política Migratoria **estima** que un 75% de la población

indocumentada en Mississippi no son asegurados y que casi un 40% vive debajo de la línea de pobreza. Aún cuando los centros de vacunación y pruebas **no cobran**, gastos de transportación y tasas administrativas impiden a muchos de acceder estos recursos.

La política de vacunación del DHS sugiere que los funcionarios de gobierno garanticen que la recuperación de los Estados Unidos del COVID-19 incluyan a los inmigrantes indocumentados. Además, las experiencias vividas por esta comunidad durante esta pandemia enfatizan la responsabilidad del gobierno en comprometerse a esto. De igual manera, se necesita que las barreras sistémicas que crean obstáculos particulares para el acceso a cuidado médico de inmigrantes en Mississippi sean los primeros que sean abordado.

Miedo y desconfianza

Muchos inmigrantes indocumentados rechazan ayuda médica por **miedo** de ser cuestionados sobre su estatus migratorio o que este sea divulgados a oficiales que los busquen para detención, deportación o por discrimen.

Las declaraciones públicas por parte de funcionarios de gobierno a nivel estatal y federal que denigran a las comunidades inmigrantes han exacerbado la desconfianza que muchos miembros de la comunidad tienen con el gobierno. El expresidente Trump decretó sobre 400 políticas **antiinmigrantes** que normalizan las retóricas xenofóbicas. Steve Scalise, un representante en el congreso del estado de Luisiana, el líder de minoría y un miembro importante en la Subcomisión selecta sobre la crisis del coronavirus **llamo** el memo de las localizaciones sensibles por la DHS “una bofetada” a los ciudadanos americanos. Además, este exhorto al presidente Biden a “que abandonara este plan ridículo”. Las declaraciones estaban llenas de información errónea que fue diseminada por funcionarios del gobierno como el Gobernador de Nebraska, Pete Ricketts. Estos **reclamaron falsamente** que los inmigrantes indocumentados no recibirían las vacunas, lo cual causo mucha confusión y escepticismo.

Las **reacciones** de ciertos funcionarios en Mississippi a la redada traumática en la fábrica de pollo arraigo aún más desconfianza en el gobierno, especialmente en su respuesta contra el COVID-19. Por ejemplo, el gobernador de entonces, Phil Bryant, tuiteó su reacción

que las redadas de ICE “estaban haciendo un gran trabajo”. De forma similar, el gobernador Tate Reeves tuiteó que esta “alegre de ver” como ICE arrestó sobre 700 personas en la operación del 2019.

Mientras esta retórica puede ser descrita como palabras vacías, el daño que estas declaraciones causan en la comunidad inmigrante y para la salud pública de todas es muy real y preocupante. Según Selma Alford, la directora y coordinadora de acceso lingüístico bajo la Oficina de prevención y equidad de salud para el Departamento de salud de Mississippi, el trauma cometido por agentes del gobierno crea barreras para la disposición de las comunidades inmigrantes en acceder cuidado médico para combatir el COVID-19. Por ejemplo, muchos individuos evitan hacerse pruebas e ir a centros de vacunación debido a la presencia de oficiales armados de la Guardia Nacional de Mississippi. “Nosotros sabemos que hay miedo en las pruebas como tal y si se añade el componente del miedo en ser deportado si haces una prueba, debido a que ves figuras de autoridad en uniforme”, dice Selma. Dr. Chigozie Udemgba, director de la OPHHE, está de acuerdo con esto. “Esto sigue la lógica que vemos en la comunidad negra, donde factores históricos crean una desconfianza y un miedo indirecto... solo el miedo y el entendimiento sobre lo que ha ocurrido en el pasado contribuye indirectamente a problemas de acceso de parte de la población (inmigrante) y la comunidad”.

Paola, una estudiante de Mississippi College que está en los Estados Unidos con un permiso de trabajo, menciona como el miedo generalizado en la comunidad inmigrante no es solo por ICE. “Cuando vemos a un policía, no nos sentimos a salvo, nos sentimos amenazados”. Mientras los miembros de la comunidad están conscientes de las diferencias entre las agencias locales, estatales y federales, hay un sentimiento en que estas agencias no trabajan independientemente de las otras. “Es difícil convencer a la comunidad que hay dos entidades separadas cuando se han visto trabajando juntos en eventos que han perjudicado a la comunidad”, dice el Dr. Udemgba. Según Esther, una hondureña-americana que es una estudiante de cuarto año en Mississippi College, hay miembros de la comunidad que cuando se enfrentan con enfermedades, “prefieren ir a su casa y fallecer que ser arrestados y entregados a ICE”. Aún en **ciudades santuarios**, trabajadores indocumentados

indican su miedo en que su información sea compartida con ICE cuando se vacunen.

La **política del CDC** articula que la data no puede ser usada “para ningún procesamiento civil o criminal, incluyendo, pero no limitado, a acciones coercidas de inmigración”. **La ley de privacidad médica** impide que se comparta información con ICE si alguien se vacuna. Como sea, muchas de estas protecciones no son suficientes independientemente para superar la desconfianza justificada que muchos inmigrantes tienen con operaciones por el gobierno.

Barreras lingüísticas y culturales

Solo hay un **manejo** de proveedores de salud en Mississippi que hablan inglés y casi nadie puede entender otros idiomas o dialectos regionales. El MSDH ofrece **interpretes** en sus hospitales y centros de vacunación y pruebas, pero esta información no es muy conocida por los miembros de la comunidad. Lorena, una inmigrante y ciudadana de los Estados Unidos que llegó cuando era una adolescente y ahora trabaja para una agencia de gobierno en Mississippi, dice que “las personas no se sienten cómodas yendo a los doctores porque no saben si van a tener traductores. Además, ellos tienen miedo”.

Este miedo nace de la discriminación constante que sufren los inmigrantes en lugares médicos. “Somos hispanos, no pertenecemos aquí. Ellos piensan que no nos merecemos algo mejor”, menciona Paola. “Cuando ves a tu gente, te sientes a salvo”, dice ella. Sin embargo, la ausencia de un enlace cultural que conoce y es sensible a los lenguajes y traumas de la comunidad, “en vez de sentirnos seguros... [los hispanos] tenemos miedo usualmente”. Muchos miembros de la comunidad inmigrante de Mississippi pueden testificar sus experiencias de desprecio, diagnóstico equivocados y otras formas de maltrato por su aparente nacionalidad, especialmente cuando los pacientes tienen una falta de conocimiento del inglés. Aún con estas situaciones discriminatorias, la mayoría no son reportadas debido al miedo de que los proveedores de salud sean indiferentes y, en el peor caso, que su información sea compartida con la policía o ICE.

Una manera de crear un enlace entre los proveedores de salud y la población inmigrante en Mississippi es

diversificando el equipo médico para que incluyan miembros de esta comunidad. Sin embargo, hay muchos obstáculos que previenen esta diversificación y que saca a muchos futuros doctores del estado. Por ejemplo, universidades como el Centro de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Mississippi impone la ciudadanía o residencia como un **requisito** para ser admitido. Paola, que aspira a ser doctora, habla personalmente sobre estas políticas. “Nosotros no tenemos muchos doctores hispanos... porque Mississippi tiene una política muy restrictiva para su escuela de medicina”, dice ella. “Se pudiese tener doctores que puedan traducir para sus pacientes y puedan abordar sobre temas con ellos en su propio lenguaje. Como sea, si no estas admitiendo personas bilingües para que sean doctores... construyes aún más barreras”. “No hay suficientes doctores, pero le están cerrando la puerta a aquellos que quieren ser”.

Los datos empíricos recopilados por la OPHHE confirman la correlación entre la fluidez del inglés y el acceso a cuidado de COVID-19 pueden ser en gran parte atribuidos a ansiedades relacionadas con su estatus migratorio. Tras un estudio para medir la opinión de la comunidad sobre el uso de la Guardia Nacional en los centros de pruebas, Selma reporta que los individuos que contestaron en Inglés se sentían más cómodos con el uso de este personal. Para los que contestaron en español, “el miedo era mucho más presente”.

La OPHHE es muy activa en crear más enlaces para acabar con la división cultural entre los inmigrantes y el sistema de salud. Luis Espinoza, un organizador de la Alianza de Inmigrantes de Mississippi (MIRA) y el director del periódico en español de Mississippi La Noticia, ha pasado el último año recopilando data sobre el sentimiento de la comunidad y promoviendo información de salud pública a través de todo el estado. Con la ayuda de MIRA, La Noticia y otras organizaciones comunitarias, la OPPE ha formado un grupo operativo hispano y un grupo operativo vietnamita para entablar la división entre pacientes inmigrantes y el sistema de salud. De igual manera, con los esfuerzos que se están llevando a cabo, el trauma que tantos inmigrantes han sufrido en Mississippi requiere la atención y labor de parte de las agencias de gobierno si se quiere resolver.

Otros lugares protegidos

Los lugares médicos no son las únicas localizaciones sensibles que tiene un historial reciente muy agresivo con las acciones coercidas de parte del servicio de inmigración que interfieren con las vidas de inmigrantes. Esther tiene muchas memorias del miedo que sentía en la comunidad hispana mientras crecía en Pearl. “Me acuerdo de que el número de feligreses disminuía mucho... porque había el miedo de que ‘si voy a la iglesia, hay una posibilidad que me pare la policía y me reporten a ICE’”. Contrario a la política de ICE, muchos de estos miedos se materializaban. “muchas personas iban a la iglesia y en cuanto salían del servicio religioso, los paraba la policía, los detenía ICE y antes de que supieras, te deportan a tu país de origen,” cuenta Esther.

“Yo me acuerdo ser chiquita y estar aterrorizada de “¿qué pasaría con mi familia? ¿A dónde irían mis padres? ¿A dónde yo iría?” Lorena también se acuerda de aquel tiempo en que ICE estaba muy activo en sus arrestos en la comunidad hispana. Ella se acuerda cuando su hijo, aún cuando ella tiene ciudadanía, le pregunto, “Mamá, ¿que pasaría si te deportaran?”

El costo de estas acciones coercidas de parte del servicio de inmigración es muy alto y muchas de las veces recaen en los jóvenes, lo que garantiza un daño psicológico intergeneracional. La [data](#) recopilada por

el Centro de Estudios Migratorios sugiere que sobre 5 millones de niños nacidos en los Estados Unidos viven con padres indocumentados. Los pediatras [advierten](#) que todos ellos están en riesgo de desarrollar “estrés tóxico” por el miedo sobre el estatus migratorio y por el aislamiento. Las familias no solamente se abstienen de ir a la iglesia, pero, según Esther, muchos padres titubean en matricular a sus hijos en la escuela por miedo de que sean identificados por su estatus migratorio. Para los miembros de la comunidad que están matriculados, muchos de ellos tienen que balancear sus responsabilidades académicas y los efectos psicológicos que sufrieron después de la redada del 2019. Por ejemplo, algunos estudiantes luchan con mantenerse despiertos en las clases, ya que trabajan horas nocturnas en las fabricas de pollo. Esto lo más seguro se debe a que estas deportaciones en masa les roba a muchas familias de sus sustentadores económicos principales (por lo cual muchos niños fueron los remplazos).

Aun cuando cualquier política de ICE o el memo de DHS sugiere otras realidades, los años de ataques dirigidos a las comunidades inmigrantes han obstruido el acceso a localizaciones sensibles. Por lo cual, se necesitan acciones más robustas para resolver estas circunstancias.

Conclusión

En su declaración [en contra](#) de la política de la DHS para el igual acceso de vacunaciones, el rep. Scalise exhorto al presidente Biden que “se enfocara en que los envejecientes, los vulnerables, los trabajadores de primera línea y otros americanos esenciales se vacunaran lo antes posible”. Lo que el rep. Scalise no menciona es que, precisamente al seguir estas normas y prioridades, se tiene que asegurar que los inmigrantes de Mississippi (incluyendo los que no son ciudadanos y las personas indocumentadas) tengan acceso a la vacuna del COVID-19 y a otros servicios esenciales.

Se estima que hay alrededor de la mitad de los [11 millones](#) de americanos indocumentados se definen como [esenciales](#) por la Agencia de Seguridad Cibernética y Seguridad de la Infraestructura. Si no se habla sobre la falta de acceso médico, especialmente durante una pandemia, es un golpe fatal para la esperanza de tener inmunidad colectiva y la recuperación económica en este país. El cirujano general Jerome Adams [dijo](#) que “nadie en este país será negado de su vacunación por su estatus de documentación”. Como sea, mientras se mantengan las innumerables barreras en los servicios de salud, este

país esta negando la oportunidad de vacunar no solo a los inmigrantes indocumentados, pero a sus amigos y familiares también.

Mientras los datos en este asunto son muy limitados, conversaciones con los miembros y líderes de comunidad han hecho muy claro que esta exclusión se extiende más allá del sector médico. En las palabras

de Lorena sobre este asunto, “el miedo no solo limita a instituciones medicas. También incluye a la policía y con todos aquí. Cuando vas al hospital, te sientes rechazado. Si te paran en la carretera y tu estatus no está “correcto”, sabes que estás en peligro... El problema es que cuando una persona hispana ve a alguien en uniforme, van a tener miedo”.

Recomendaciones

Para cuerpos estatales y locales

- Promover diversidad e inclusión a través de sitios médicos, incluyendo clínicas privadas y facilidades rurales
- Llevar a cabo entrenamientos de aptitud cultural liderados por la comunidad dirigidos a todos los proveedores de salud
- Contratar interpretes comunitarios y publicar que los servicios de traducción están disponibles y libres de costo.
- Implementar políticas que atraigan proveedores de salud multilingües e inmigrantes, incluyendo la admisión y autorización de estudiantes de medicina sin importar su ciudadanía.
- Asegurar responsabilidad
 - Crear sistemas seguros y confiables para reportar cualquier discriminación por parte de proveedores de salud y atender cualquier preocupación que tengan de represalias o exposición al servicio de inmigración.

Para la administración de Biden y las agencias federales

- Acabar con todas las acciones coercidas por parte del sistema de inmigración en localizaciones sensibles.

- Asegurar responsabilidad

- Crear sistemas seguros y confiables para reportar violaciones de la política de localizaciones sensibles por parte del sistema de inmigración.

Para agencias locales, estatales y federales

- Tomar acciones específicas para incluir a los inmigrantes indocumentados en esfuerzos de salud pública
 - Reformar las políticas existentes que permiten a la guardia nacional y a otros funcionarios de gobierno vestirse en ropa civil o en chalecos de tráfico mientras dirigen pruebas y vacunas de COVID-19.
- Diseminar información de salud pública en los lenguajes más comunes entre las poblaciones locales de inmigrantes, incluyendo lenguajes indígenas cuando sea necesario.
- Aclarar que los datos personales que son recopilados en el proceso de vacunación no van a ser compartidos con el servicio de inmigración y agencias relacionadas, incluyendo a la policía local.